

Situación política

A primeros de mes, el Premier Victor Ponta, anunció la intención de promover, para octubre de este año, un referéndum sobre la revisión de la Constitución. Seguirán varios meses de debates en el marco de un Foro constitucional ad-hoc del cual formarán parte actores jurídicos y constitucionales así como organizaciones no gubernamentales. Aprobada en 1991 y revisada en 2003, la Constitución ha revelado a lo largo del tiempo ambigüedades y límites que afectaron el equilibrio y la buena colaboración entre las instituciones del Estado. El mundo político, en su conjunto, pero también los comentaristas opinan, al unísono, que hay que modificar muchas cosas en la Constitución. Los objetivos principales serían aclarar las atribuciones del presidente y sus relaciones con el Gobierno y el Parlamento, la estructura del legislativo y el estatuto de los parlamentarios.

La mayoría de la Unión Social Liberal, suficiente para imponer su propia versión, no acepta la visión de la oposición demócrata liberal relativa a la futura Constitución de Rumanía. Si el Partido Demócrata Liberal, por ejemplo, invoca el referéndum celebrado en 2009 y se declara partidario de un Parlamento unicameral integrado por 300 miembros como máximo, la USL opta por mantener ambas cámaras pero con atribuciones distintas e incluso con modalidades diferentes de elección. Partiendo de la experiencia de la difícil co-habitación con Traian Basescu, los social-liberales quieren que el jefe del Estado desempeñe un papel de árbitro sin intervenir en el juego político.

La USL también desea que el primer ministro sea designado por el partido que obtenga la mayoría de los escaños y no por el jefe del estado. Para frenar el fenómeno de la migración de un partido a otro, la USL propone que un parlamentario pierda su mandato si abandona el partido por el cual presentó candidatura. El PDL rechaza la idea de una república parlamentaria tal como la esboza los adversarios de la USL.

En la votación y los debates sobre el futuro de la Constitución, la Unión de los Húngaros de Rumanía desempeña un papel bastante importante. Esta formación desea, al igual que la USL, mantener el sistema bicameral, así como limitar las atribuciones presidenciales. La UDHR también desea eliminar la palabra "nacional" del artículo 1 que indica que Rumanía es estado nacional, soberano e independiente, unitario e indivisible. Pero el resto de la clase política declara rotundamente que este asunto no es negociable.

En el ámbito de la política internacional, sigue teniendo un peso importante el tema del ingreso del país en el espacio Schengen. Como se sabe, la adhesión de Rumanía (y de Bulgaria) estaba prevista para el mes de marzo de 2011 pero la decisión se ha aplazado muchas veces porque algunos Estados miembros consideraban escasos los progresos realizados por Bucarest en la reforma de la justicia y la lucha contra la corrupción. Uno de los primeros países que se mostraron en contra de la adhesión de Rumanía era Holanda (uno de los principales inversores y socios comerciales de Rumanía), que parece haber dado un paso atrás en su posición intransigente. Después de la publicación del último informe europeo sobre la justicia rumana, el Gobierno holandés, con palabras de su Ministro de Exteriores, Tinnemans, saluda los progresos realizados por Rumanía, aunque sigue cauto ante la posibilidad de que Bucarest reciba el visto bueno en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que se celebrará los próximos 7 y 8 de marzo.

Su homólogo rumano, Titus Corlăţean, ha expresado su esperanza de que en dicha ocasión se pueda dar un primer paso adelante, de manera que Rumanía pueda recibir el visto bueno para comenzar su adhesión por la apertura de sus fronteras aéreas y marítimas. El primer

ministro Victor Ponta espera que se tome una decisión y afirma que Rumanía ha cumplido con todos los criterios técnicos de adhesión. Recientemente, Ponta ha propuesto que Bucarest envíe a todos los jefes de Estados y de Gobiernos de la UE una carta común firmada por el Gobierno, la Presidencia y el Parlamento respecto a la adhesión al espacio Schengen.

Por su parte, el jefe del Estado, Traian Băsescu, opina que deberían firmar dicha carta todos los líderes políticos de la mayoría parlamentaria. Además, Băsescu opina que en este documento se tiene que mencionar el compromiso político del actual poder de solucionar los problemas señalados en el informe de la Comisión Europea sobre la situación en el sector de la Justicia.

Situación económica

Según las estimaciones previas publicadas por Eurostat, el PIB de la zona euro bajó un 0,6% en el período octubre-diciembre, frente al tercer trimestre, cuando el declive fue del 0,1%. En cambio, Rumanía ha superado las expectativas y está entre los pocos países de la UE, junto con Bulgaria, Eslovaquia y los Estados Bálticos, que han registrado un leve crecimiento económico. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, Rumanía ha evitado una nueva entrada en recesión técnica al final del año pasado. En los últimos tres meses, el PIB ha aumentado un 0,2% frente al tercer trimestre y un 0,1% frente al mismo período del 2011. Sin embargo, el analista económico Aurelian Dochia advierte que estas cifras son muy bajas. 2013 no parece ser muy distinto del anterior y es poco probable que mejore el nivel de vida de la población. Dochia añade que, como las exportaciones de Rumanía se han retrasado y la industria ya no tiene la misma contribución que tenía, sería posible alcanzar un objetivo de crecimiento económico del 1,6% estimado oficialmente para este año únicamente si se registra un buen año agrícola y si las economías de las zonas euro mejoran de forma significativa.

El Parlamento de Bucarest ha aprobado el presupuesto para 2013 que, según el mismo Primer Ministro, Victor Ponta, «es lo mejor que se podía hacer en este momento». El presupuesto se basa en un crecimiento económico del 1,6% del PIB, una inflación media del 4,3% y un déficit limitado al 2,1% del PIB. La cotización media del leu prevista para 2013 es de 4,5 lei por un euro. Presionada por el tiempo pero favorecida por la fuerza que tiene en el legislativo, la mayoría social liberal ha aprobado el proyecto de presupuesto sin ninguna de las más de 10 mil enmiendas propuestas por la oposición demócrata liberal.

El Banco Nacional, tomando distancia de las discusiones políticas, llama la atención de que el poder del leu depende de la situación de la moneda única europea, pero también de la producción agrícola interna y las reformas estructurales, sobre las que el gobernador del BNR, Mugur Isărescu, se muestra reservado.

Una vez más, el BNR ha subrayado la importancia de atraer fondos europeos, que fomentarían las inversiones en sectores clave como la infraestructura y la agricultura y facilitarían el crecimiento económico.

El crecimiento económico de Rumanía se situará este año en el 1,5%, según ha estimado el Banco Nacional, una estimación que coincide con la del Fondo Monetario Internacional. A este respecto, el gobernador del Banco Central, Mugur Isărescu, opina que la reducción del interés de la política monetaria por el BNR afectaría a los ahorros internos, que son insuficientes y, en vez de generar crecimiento económico, tendría un efecto contrario, a causa de los escasos recursos financieros. Precisamente por eso, el Consejo de administración del BNR ha decidido mantener la tasa de interés de política monetaria en el 5,25%.

En cuanto a la inflación, la autoridad bancaria espera que ésta se sitúe entre el 5 y el 6% en la primera parte de este año y que, a finales de 2013, la tasa anual de inflación vuelva al nivel del 3,5%, es decir el límite superior del objetivo establecido por el Banco Nacional.

Isărescu ha recordado que Rumanía tiene firmado un acuerdo de tipo preventivo con el Fondo Monetario Internacional, con la Unión Europea y el Banco Mundial, pero todavía no ha utilizado los recursos financieros previstos en este acuerdo. Según el gobernador del Banco Central, un acuerdo con el FMI puede consolidar la confianza de un país en los mercados externos.

Situación social

Una de las plantas químicas más importantes de Rumanía, Oltchim de Ramnicu Valcea (sur del país) entró en insolvencia, el mes pasado, a causa de las deudas que alcanzan centenares de millones de euros. La planta figura en la lista de las compañías estatales que deberían privatizarse, según lo acordado con el FMI y los demás acreedores internacionales.

En el caso de Oltchim, una primera tentativa de venta del paquete mayoritario de acciones fracasó a finales del año pasado. El Estado desea continuar este procedimiento, pero con un inversor estratégico. Hasta entonces tiene que resolver la situación desesperada de los 3.000 empleados de la planta que desde hace varios meses vienen organizando protestas en la calle y huelgas. Los empleados exigen garantías relativas a la seguridad de sus empleos, el pago de sus sueldos y la reanudación de la actividad.

El ministro rumano de Economía, Varujan Vosganian, se ha reunido con los representantes de los asalariados para transmitir que para salvar la planta necesita un compromiso político de parte de toda la Unión Social Liberal (en el poder), el apoyo de los sindicatos y paz social. Vosganian ha advertido que ningún inversor compraría una compañía cuyos empleados se declaran en huelga de hambre y amenazan con darse fuego.

El primer ministro Victor Ponta considera que esta planta podría volver a ser viable, pero no en la forma actual «que cuenta con más de 3.000 empleados». Sostiene, sin embargo, que una parte importante de Oltchim podrá ser revitalizada a través de una inversión privada».

La principal formación parlamentaria de oposición, el Partido Demócrata Liberal, culpa al Gobierno por la situación en que se encuentra la planta y ha anunciado que presentará una moción en el Parlamento cuyo tema será la planta Oltchim. En opinión del líder demócrata liberal, Vasile Blaga, la actual situación demuestra una vez más que durante la campaña electoral del año pasado, la USL hizo promesas sin fundamento.

A corto plazo, los empleados de Oltchim esperan que las autoridades rumanas puedan conseguir que la Comisión Europea apruebe una ayuda estatal por un valor total de 45 millones de euros.